

A. ALLÒ QUE EN JOAN VA DIR: MÉS ENLLÀ DE LA RENDA MÍNIMA: EL SALARI CIUTADÀ

Debemos ser cautos en el momento de presentar a la renta mínima garantizada como uno de los grandes objetivos de política social, en algunos lugares ya conseguido, en otros todavía por conseguir. En realidad, son varios los interrogantes que preocupan a no pocos trabajadores sociales, sindicalistas, juristas y políticos. Algunos, los de tipo jurídico sobre todo, han quedado patentes ya en la primera parte. Otros, de carácter sociopolítico, podrían formularse de la forma siguiente.

¿Debería ser la renta mínima sólo una medida transitoria, de carácter temporal, en la espera de que nuevas políticas de reparto del trabajo y distribución de la renta más justa la hagan innecesaria? ¿Debería ser el inicio de la transición hacia un tipo de sociedad en la que el tiempo dedicado al trabajo (en su sentido económico y mercantil) podrá reducirse u organizarse en períodos intermitentes de dedicación al mismo, y en la que “un segundo cheque asegurará a todo ciudadano un nivel de vida normal (no de simple subsistencia) durante los períodos en que no se trabaja”, pudiéndose, así, dedicarse a otras ocupaciones libremente escogidas? O más bien ¿pretende ser el “opio del pueblo para reducir a la inactividad y al silencio a un ‘tercio’ de la población a fin de que los otros ‘dos tercios’ puedan disfrutar con toda tranquilidad de la riqueza social”? Una generalización del

ingreso mínimo, tal como hoy funciona mayoritariamente en Europa, concebido como “mínimo de subsistencia”, por lo que se refiere a su cuantía, ¿no tiene el peligro de ejercer una presión de los salarios a la baja, institucionalizando, al mismo tiempo, despidos masivos de los trabajadores sin ninguna contrapartida? ¿No servirá, también, para conseguir que el desempleo y la marginación sean tolerables y aceptados como consecuencia (incluso condición) indispensable de la “racionalidad económica”?

No son pocos los que temen que, tras el debate sobre la renta mínima garantizada, se esconden las hipótesis subyacentes bajo los tres últimos interrogantes planteados, dando por supuesto que, pese a una cierta recuperación económica del sistema, las situaciones de marginación y de pobreza no disminuirán. Los informes de los expertos nos dicen que, más bien, van a aumentar (“no hay tarta para todos porque algunos trozos deben ser necesariamente muy grandes”). Precisamente por eso, se piensa, debe institucionalizarse una política asistencial de subsistencia (renta mínima, pensiones asistenciales, “salario de la pobreza”) para permitir que ese “tercio excluido” pueda sobrevivir, consolidándose, así, un nuevo colectivo de “asistidos inactivos”, entre los que difícilmente se incubarán proyectos subversivos.

Esta es, en síntesis, la cuestión que nos preocupa. Mucho nos tememos que en la base de la actual política llamada neoliberal, tan defendida por los nuevos economistas, exista ese propósito: “racionalizar” y garantizar la dualización de la sociedad, la “sudafricanización” de la sociedad, como diría André Gorz. El hecho de que la mayoría de los esquemas, hoy existentes en Europa sobre renta mínima garantizada, no contemplen la necesidad de medidas de inserción, puede ser una confirmación de que se está consolidando ese núcleo de población que difícilmente saldrá de la precariedad. Y, aun en el caso en que se contemplen medidas eficaces de inserción (cosa, como se ha visto, nada fácil) ¿va a ser posible una inserción real en un Mercado de Trabajo, ya de entrada y de raíz, segmentado y precario?

Claro está que tales afirmaciones (o hipótesis) pueden y deben matizarse: no todos los proyectos son iguales, no todas las intenciones son necesariamente cínicas. Cuando al ingreso mínimo se le añade: “de inserción”, tal como se ha explicado en la primera parte, los resultados pueden ser positivos, por lo menos en algunos casos. Pero los temores, ¿qué duda cabe?, permanecen con toda su seriedad y complejidad.

[...]

A partir de lo que se acaba de decir pueden sacarse ya dos conclusiones preliminares. La primera es la siguiente: La “renta mínima” tiene su origen en unos principios socio-económicos radicalmente distintos a aquellos en que se inspira el proyecto del “salario ciudadano”. Es decir, la renta mínima es una institución de beneficencia con una “intención conservadora: en lugar de combatir la segmentación y la sudafricanización de la sociedad intenta que éstas se transformen en algo aceptable. El ingreso mínimo garantizado funciona como el salario de la marginalidad y de la exclusión social. Por tanto, si no se presenta y se concibe como una medida ‘transitoria’ (y en este sentido habrá

de precisarse muy bien hacia dónde se orienta la transición), el ingreso mínimo garantizado es una idea de derechas”.

Esto quiere decir que no toda política de renta mínima garantizada debe ser rechazada sin más. Si se cumplen las condiciones que señala el Consejo Económico y Social de la Comunidad Europea (véase la Primera Parte de este Cuaderno) no sólo puede ser una buena medida sino incluso necesaria, sobre todo en un país como el nuestro, donde las tasas de paro, pobreza y marginación son de las más altas de la Comunidad. En todo caso la renta mínima debe ser siempre considerada como una política de “transición”, y debe ir acompañada por medidas reales de inserción. Hoy existen colectivos (jóvenes, parados de larga duración, mujeres) para los que, en no pocos casos, las actuales medidas de inserción o de reinserción cultural y ocupacional no sirven. De hecho, quedan excluidos. No están pensadas para ellos. Paro endémico, deterioro humano, etc. exigen medidas más audaces e imaginativas, pero acompañadas, además, por una renta, siquiera mínima, para comer, vestirse, educar a los hijos, vivir, etc. Estos son los colectivos precisamente para los que debe pensarse la renta mínima. En este sentido no dejan de llamar la atención ciertas declaraciones de la Administración de nuestro país, excluyendo como inaceptable e ineficaz la implantación de esta medida, cuando se trata de algo aceptado ya por la mayoría de los países de la Comunidad. La excusa de que no va a la raíz del problema para la erradicación de la pobreza no es suficiente. “La pobreza se ataja modificando las condiciones de vida y sus causas: nivel de educación, infraestructura y difusión tecnológica, no por la implantación de un salario social”. De acuerdo, pero mientras tanto ¿qué?, nos preguntamos.

La segunda conclusión se refiere a la “asignación universal incondicional” (la propuesta de los liberales radicales). Adolece de los mismos incon-

venientes que la “renta mínima”: además de favorecer cierto parasitismo social, puede servir de pretexto para el incremento de la economía sumergida o para aceptar trabajos marginales mal retribuidos a título de un complemento necesario. Tales trabajos nadie los aceptaría en otras circunstancias. En definitiva, una nueva fuente de marginación y de exclusión social.

Ambas medidas, pues, (la renta mínima y la asignación universal) se basan en una política “paliativa que promete proteger a los individuos contra la descomposición de la sociedad salarial sin desarrollar una dinámica social capaz de ofrecer perspectivas reales de emancipación”. Continúan siendo válidas, sin embargo y a nuestro entender, las salvedades que se han expuesto en párrafos anteriores.

[...]

El fundamento del salario ciudadano está en “el vínculo indisoluble entre el derecho a una renta y el derecho al trabajo”. Es decir, cada ciudadano debe “tener el derecho a un nivel de vida normal. Pero, al mismo tiempo, cada persona debe tener la posibilidad (el derecho y el deber) de suministrar a la sociedad el trabajo-equivalente de lo que él consume: el derecho de ganarse la vida y el derecho de no depender para su subsistencia de la buena voluntad de los que deciden en materias económicas o de subsidios. Esta unidad indisoluble entre el derecho a un ingreso y el derecho al trabajo es la base de la propia ciudadanía”.

Y esto ¿cómo puede conseguirse?, ¿cómo puede llevarse a la práctica? La respuesta, desde luego, no es fácil. Pero es posible, si nos colocamos en una doble perspectiva: la perspectiva de una utopía posible y la perspectiva de un trabajo diferente, o dicho con más precisión, la perspectiva de una reestructuración radical del trabajo.

[...]

No podemos imaginar el significado de la asignación básica ciudadana desde los esquemas clásicos del trabajo y de sus formas de organización y de remuneración. Queremos decir con esto que el trabajo, en su sentido económico y vinculado necesariamente a los diversos procesos de produc-

ción (directa o indirecta) es ya, y lo será todavía más, un “bien escaso”. Existe amplia y seria bibliografía donde se aportan datos más que suficientes para demostrar que la “era del pleno empleo”, en su sentido clásico, ha llegado a su fin.

[...]

La Ley del valor no sirve

Por esta ley se establece que la persona que trabaja es remunerada en función de las horas trabajadas. ¿Por qué decimos que tal ley hoy no sirve? Por una razón evidente. El trabajo, tal como se ha entendido hasta ahora, ya no es el medio idóneo o exclusivo para la distribución de la renta. Y esto porque en estos momentos nos encontramos con centenares de miles de personas sin trabajo: cerca de quince millones en la Comunidad Europea están en paro forzoso, sin derecho, por tanto, a percibir un salario, fruto de su trabajo. Si pueden subsistir será gracias al subsidio de desempleo (los que tengan derecho a él), a la economía sumergida o, en su caso, a la “renta mínima”. Se trata sólo de medidas de emergencia que no van a la raíz del problema. Medidas de las que no todos pueden beneficiarse. Esta constatación nos obliga a llegar a la siguiente conclusión: es necesario superar la Ley del Valor, y proponer otro criterio de distribución de la renta. En buena lógica este nuevo criterio parece que debería ser éste: “a cada uno se le debe remunerar no en función de las horas trabajadas, sino en función de la riqueza social producida”. Esto significa, en la práctica, que el ingreso o la renta de una persona no tiene por qué depender de la duración del trabajo, sino del trabajo en sí mismo. Y cierta cantidad de trabajo, como explicaremos en seguida, puede y debe garantizarse a todos los ciudadanos, precisamente porque tienen derecho a él. De ahí que “a pesar de que el trabajo sea intermitente o de duración limitada, la renta garantizada, a lo largo de toda la vida y a cambio de la cuota de trabajo correspondiente, será siempre la consecuencia del derecho que uno adquiere por su trabajo y no por las horas trabajadas”. El hecho de la “innovación tecnológica”, que posibilita el producir mucho

más con menos mano de obra y en menos tiempo, juega un papel determinante en el cambio de los criterios remunerativos.

[...]

Del pleno empleo a la “plena actividad”: Las ocupaciones socialmente “útiles”

Estamos hablando repetidamente de “derecho al trabajo”. Pero, al mismo tiempo estamos de acuerdo que a millones de hombres y mujeres de todo el planeta les está vedado el ejercicio de este derecho. Y esto a pesar de que este derecho está recogido tanto en la Carta Universal de los Derechos Humanos, como en las “constituciones” de casi todos los países (art. 35 de la Constitución española). Nos encontramos, pues, frente a una dramática contradicción. ¿Cómo superarla?

Si por trabajo entendemos pleno empleo a tiempo completo para todos los ciudadanos, hablar de derecho al trabajo, hoy, continúa siendo un tremendo engaño. Pero si por trabajo entendemos estar empleado no necesariamente a tiempo completo, sino a tiempo parcial, intermitente, o estar ocupado en algunas actividades que normalmente no se consideran vinculadas al proceso productivo (directo o indirecto), ocupaciones de utilidad social no rentables en sentido económico, entonces sí que podemos hablar de un derecho al trabajo exigible por todo ciudadano. Se trata, dicho con otras palabras, del “derecho a estar ocupado” y del derecho a percibir, de una u otra forma, una compensación o remuneración económica. Es desde esta perspectiva desde la que debe contemplarse el “Salario Ciudadano”, como explicaremos en seguida.

Lógicamente estas consideraciones nos invitan a utilizar el concepto de “plena actividad” más que el de “pleno empleo” en su sentido clásico. Por tanto, el derecho al trabajo se refiere no sólo al trabajo económicamente rentable sino a otras formas de ocupación o de actividad. Ahora bien, si se es consecuente con esta definición de pleno empleo / plena actividad, debemos concluir que el trabajo no sólo “no es un bien escaso” sino que

hay más que trabajo suficiente para todos los ciudadanos. Veamos.

Si en estos momentos se quisiera atender eficazmente a las carencias reales en el terreno de la cultura, de la sanidad preventiva, de la calidad de la enseñanza, de la cooperación con zonas de la tierra menos desarrolladas, de atención a antiguos y nuevos colectivos no suficientemente atendidos (minusválidos, población anciana...), servicios sociales en régimen de comunidades autosuficientes y autogestionadas..., serían necesarios tantos puestos de trabajo como los que se han perdido por las reconversiones o por la introducción incontrolada de las nuevas tecnologías. Y muchos más puestos de trabajo serían necesarios si se presta la debida atención a las nuevas necesidades sociales.

[...]

La garantía de un ingreso suficiente para aquellos que margina la sociedad no debe ser ni el objetivo final ni el punto de partida político. El punto de partida debe ser “la disminución del volumen del trabajo económicamente necesario”, el objetivo debe ser eliminar tanto la pobreza y el paro involuntario como la falta de tiempo, la carrera por el rendimiento, la obligación de trabajar a tiempo completo mientras dure la vida activa. No se trata, pues, de garantizar un subsidio, (salvo a título transitorio), a aquellos que se encuentran excluidos del proceso de producción, sino de suprimir las condiciones que han provocado su exclusión.

[...]

La actual oferta educativa está inmersa en la clásica cultura del trabajo, de la competitividad, del rendimiento, del tener para consumir, cuanto más mejor. Mientras prevalezca todo esto, lo que hemos dicho no será más que pura quimera y vana ilusión. Es menester una reforma pedagógica en todos los niveles (no reforma de planes de estudio que es lo que está de moda). Debe ponerse el acento en la capacidad de decidir por uno mismo, en aprender a aprender, en poseer unos conocimientos muy polivalentes... Las aptitudes y capacidades irremplazables por la máquina son las que deberían priorizarse: el saberse maravillado ante lo bello, la defensa de la naturaleza, las artes manua-

les y artísticas, el poder actuar de forma más autónoma en todos los órdenes de la vida. No hay duda de que algunos de los movimientos de lucha solidaria por la justicia y la igualdad o de defensa de la calidad de vida y por un mundo más ecológico son sensibles a muchas de las cosas que estamos comentando. Pero el debate es patrimonio de todos.

TEXT DE:

**MAS ALLÁ DE LA RENTA MÍNIMA:
EL SALARIO CIUDADANO**

Data de referència: 6/3/1990.

Codi arxivístic: ACBL50-164-T2-1615

B. LES RENDES, GARANTIA PEL DRET A UNA VIDA DIGNA

Margi Gual Izquierdo i Conxita Sánchez Medina

*La gente dice:
“Pobres tiene que haber siempre”
y se quedan tan anchos,
tan estrechos de miras,
tan vacíos de espíritu,
tan llenos de comodidad.
Yo aseguro
con emoción
que en un próximo futuro
sólo habrá pobres de vocación.*

Gloria Fuertes

Erradicar l'exclusió social i la desigualtat

A l'hora d'abordar la contextualització del pensament de Joan N. García-Nieto, la primera constatació és la vigència de les seves propostes. La defensa dels drets de la classe treballadora i que aquesta disposés de temps i recursos per a la formació, per al gaudi, per a la cultura i el creixement personal, són idees que han estat centrals en la seva obra i en la seva trajectòria. També per avançar en la consecució de la justícia social, de la igualtat, de la redistribució de la riquesa i la lluita contra l'exclusió social i la pobresa.

Ara hi ha un consens generalitzat a les societats occidentals que tothom ha de comptar amb recursos suficients per a la vida i que els poders públics hi han de donar respostes. L'accés a una vida digna, alhora que plena, integrada en societats realment cohesionades és un dret que s'ha de garantir. Però les desigualtats i la pobresa en el món són una tossuda realitat que persisteix i que no sempre impliquen estratègies globals, ni polítiques actives amb la inversió social necessària per pal·liar-les.

Un exemple d'això és la creació de l'Agenda 2030, els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que tenen l'erradicació de la pobresa com a primer objectiu, així com la reducció de les desigualtats. És una aliança mundial per realitzar canvis que permetin avançar cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Al nostre país, des de l'entorn polític, sindical, tercer sector i professionals de l'àmbit social, es convergeix en la idea d'acabar amb les polítiques socials assistencials i caminar cap a la garantia de rendes amb drets socials per a tothom, per erradicar l'exclusió social i la desigualtat.

Des dels anys noranta, quan García-Nieto hi reflexionava, hi ha hagut dues crisis econòmiques i una alta inflació, que ha tingut efectes molt durs a Espanya i a Catalunya. La crisi econòmica de l'any 2008 ens va demostrar que el sistema de protecció de les persones era molt feble. A Catalunya i a Espanya, els governs de PP i CiU van aplicar polítiques de retallades i austericides, aprovant la reforma laboral o dificultant l'accés a la renda mínima d'inserció (PIRMI abans de 1990). Com a resultat d'aquestes actuacions, va augmentar l'atur, la pobresa, la pèrdua de drets dels treballadors i treballadores, i això va provocar molt de patiment.

Quan encara no ens havíem recuperat de la crisi anterior, la pandèmia de la COVID-19 impacta de manera severa amb una nova crisi social i econòmica. El govern de coalició progressista l'afronta amb mesures diametralment diferents de l'anterior. L'any 2020 es posen en marxa diversos mecanismes com els ERTOS, la Reforma Laboral, l'increment del salari mínim (SMI) (de manera gradual fins a situar-lo en els 1.080 €) i la implementació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). La creació d'aquesta prestació és un avenç històric perquè reconeix la responsabilitat de l'Estat per garantir uns ingressos mínims a la ciutadania, evitant que augmentin les situacions de vulnerabilitat i articulant per primera vegada un escut social.

Les macroxifres econòmiques milloren, però calen polítiques que permetin que aquesta recuperació serveixi per millorar la vida de la majoria social. El control de preus en la cistella de la compra, l'energia i l'habitatge poden evitar més pobresa i desigualtat. Espanya ocupa el cinquè lloc en l'índex de desigualtat a Europa i és el país on més ha augmentat aquest índex després de la pandèmia. La feblesa històrica del sistema de protecció perpetua la pobresa estructural.

Així doncs, l'Ingrés mínim vital (IMV) era necessari per situar-se a nivell de la Unió Europea, que l'any 2010 aprova al Parlament Europeu una resolució sobre la renda mínima i la seva utilitat en la lluita contra la pobresa i la promoció d'una societat inclusiva. Els programes establerts de garantia d'ingressos dels països del centre i nord d'Europa, experiències com la francesa o la britànica, es fan servir de referència.

Espanya comptava amb un sistema de rendes mínimes d'inserció iniciat als anys vuitanta en diverses comunitats autònomes, un univers molt fraccionat i desigual entre les diferents comunitats. Però només al País Basc, Astúries, País Valencià, Catalunya i Navarra es podria considerar que hi ha una RMI propera a la dels països de la Unió Europea. La situació de Navarra i Euskadi és una excepció per una major garantia d'ingressos, per sobre de l'IMV.

S'estableix amb l'IMV un nou sistema de renda mínima a tot el territori, inexistent fins al moment. Representa un avenç important i un punt d'inflexió en la política social i el sistema de rendes. S'injecten al sistema tres mil milions d'euros, que doblen les aportacions de les comunitats autònomes amb

les rendes pròpies. Un suport important per a moltes persones i famílies, però que no ha acabat amb la pobresa. Lluny dels objectius inicials, no ha arribat ni a una quarta part de les llars que estan en situació de pobresa. Això és degut a la complexitat de requisits, obligacions i tràmits que dificulten el procés a qui l'ha de demanar i qui l'hauria de rebre.

De l'ingrés mínim a la renda garantida

A Catalunya, l'Ingrés Mínim Vital s'afegeix a una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que va arribar l'any 2017, tard i insuficient, tot i tenir el dret reconegut a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, en què l'article 24.3 diu: «Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els assegurí els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen», text incorporat per l'acció principalment de CCOO i UGT, que van reclamar que, entre diversos drets, hi figurés el d'una prestació econòmica.

Al març del 2014 es presenta per via d'urgència, la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR per la RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (ILP RGC). Després d'anys de lluita ciutadana i de tres anys de treball intens en dues legislatures, va veure la llum al juliol del 2017. Un nou dret universal no subjecte a pressupost, que situa el llindar de pobresa vinculat a l'Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya (IRSC); havia estat 12 anys congelat però fa poc s'ha modificat i s'ha situat en 614,65 euros. Els mínims de la misèria, com podria dir García-Nieto.

La RGC pretenia resoldre les situacions de pobresa estructural —noves pobreses, persones amb pensions molt baixes, treballadores pobres— i reduir les desigualtats, però la conclusió sis anys després de la seva implementació és que és insuficient i ja se n'inicia la reforma. Sols ha arribat al 40 % de les llars amb pobresa, no arriba al 33 % de les llars amb pobresa severa. La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) a Catalunya va ser del 24,7 % el 2022, i especialment greu per a la infància, amb una taxa d'un 27,5 %. La Taula del Tercer Sector apunta: «En la sortida de la pandèmia, es torna als nivells de pobresa estructural... La precarietat s'instal·la a les llars catalanes que tenen dificultats evidents per afrontar les necessitats més bàsiques».

I és que en aquest període postpandèmic assistim a un afebliment de l'estat de benestar, afavorint-ne el desmantellament, alhora que a una davallada i deteriorament dels serveis públics amb una clara intenció de privatització.

Lluny del que podia imaginar Joan N. García-Nieto, no sols no hem millorat les dades de pobresa, sinó que aquesta ha adquirit nous rostres. La precarietat, la temporalitat laboral ha generat treballadores pobres, que malgrat tenir una feina no arriben a fi de mes. I són múltiples els motius que ens porten a la feminització de la pobresa, com la bretxa salarial i de les pensions, el fet que sectors laborals molt precaris són majoritàriament ocupats per dones, sovint alhora també migrants. La segregació per raó d'origen afecta molts àmbits de la vida (laboral, educatiu, territorial...).

Els sistemes de rendes haurien de ser un recurs de protecció social que endreci moltes altres prestacions i ajuts, garantint uns ingressos suficients per fer front a les despeses bàsiques, la participació social i la realització personal. Hauria de ser compatible com a suplement per a les treballadores

més precàries. Una política que n'ha de complementar d'altres que permetin assolir taxes més altes d'ocupació i feines amb condicions dignes, sense posar en risc la resta de drets de la ciutadania: l'educació, la sanitat, les pensions...

Tanmateix, l'anàlisi de les rendes mínimes d'arreu, amb compatibilitat o sense amb les rendes del treball, i condicionades o no amb processos d'inserció laboral, no solen recollir una millora en l'ocupabilitat de les persones pobres.

Com ja detectava Joan N. García-Nieto, en el sistema capitalista i neoliberal hi ha una dificultat per assolir la plena ocupabilitat. Més amb la direcció que estan prenent les nostres societats i els sistemes de producció cap a la robotització i la intel·ligència artificial, que tendeix a la reducció de llocs de treball i reclama major qualificació professional. Tot això implica una dificultat per a la incorporació en el mercat de treball de perfils de persones per a les quals els processos d'inserció laboral són altament complexos. D'aquí que seria desitjable trobar formes d'inserció i cohesió social més enllà de les vinculades al treball.

Però es tracta de la Renda Bàsica Universal

Un model diferencial, proposat fa anys, és la Renda Bàsica incondicional i universal (RBU). Un instrument que, segons plantegen els seus defensors, pot acabar amb la pobresa, l'exclusió i l'estigmatització de les persones pobres, de fàcil accés, que reduiria burocràcia i contribuiria a erradicar els treballadors i les treballadores pobres, permetent que poguessin desenvolupar el seu projecte de vida, alhora que explorar l'emprenedoria i la creació. Seria un avenç en la cohesió social, la redistribució de la riquesa, la reducció de les desigualtats i l'apoderament de les persones. Aquest model es planteja com a assumible econòmicament, tenint en compte, també, que el 67,3 % de les llars han rebut almenys un tipus de prestació social (per vellesa, desocupació, supervivència, ajuts a les llars, malaltia i invalidesa, entre d'altres). Malgrat tot, continua obert el debat de la viabilitat i la complexitat de la seva implementació.

Les rendes mínimes, acompanyades d'altres polítiques d'inserció laboral i social actualitzades, podrien configurar-se també com una transició cap a la renda bàsica, que permetria no haver d'acceptar feines precàries, obligant les empreses a oferir condicions laborals dignes i facilitar les polítiques per a l'ocupació de qualitat.

Cal tenir en compte que és una mesura valorada positivament de manera majoritària per la població catalana. S'han realitzat arreu proves pilot de la Renda Bàsica Universal, amb resultats desiguals, alhora que comptem amb diversos estudis a Catalunya i a Espanya que en defensen la viabilitat econòmica. A Catalunya, el mes de març de 2023 estava prevista la realització d'una prova pilot de la Renda Bàsica, que fa uns quants anys que es prepara, i que va ser ajornada en el debat de pressupostos del Parlament de Catalunya, amb arguments per part d'alguns grups sobre la seva inviabilitat.

Es considera que la cobertura de les necessitats bàsiques amb la renda proporciona temps per formar-se, per trobar feines millors i, millorant la renda, per evitar dependències posteriors.

El dret al treball i el dret a viure

Contraposades a aquesta mesura i vinculades al món del treball, hi ha propostes alternatives a la renda bàsica que formulen arribar a la plena ocupació a través d'un Pla de treball garantit, amb el treball ocupant la centralitat, amb polítiques públiques imbricades amb el món laboral. Alerten que l'accés a renda bàsica sense lligams amb el treball podria reduir l'incentiu per buscar feina i treballar. Tot i que aquesta afirmació no està demostrada, podria evitar-se permetent que els ingressos dels individus augmentin a través de les rendes del treball per sobre del nivell de la renda bàsica.

Continua viu el debat en les nostres societats entre els dos drets, la renda i el treball. Desenvolupar polítiques actives per a un Pla de treball garantit i instaurar una renda bàsica són dues propostes que tenen crítiques i valoracions positives i en alguns debats se situen enfrontades, malgrat que segurament serien complementàries i necessàries l'una per assolir l'altra.

A Espanya, després d'anys d'atur desbocat, de temporalitat i precarietat, s'ha capgirat la situació implementant un seguit de mesures que han situat l'atur al voltant del 12 %, quasi el seu valor estructural (a Europa es considera al voltant del 4 %) i algunes veus potser massa optimistes s'aventuren a parlar de plena ocupabilitat, una situació inimaginable per García-Nieto.

En les nostres societats, caldria reorientar el concepte treball, la seva centralitat, i incorporar-hi totes les feines, tenint en compte les cures en sentit ampli i altres necessitats socials, ampliant les feines en els àmbits de l'atenció a les persones, l'educació, la sanitat, la cultura, a més de nous nínxols d'ocupació en l'àmbit ambiental, per exemple.

Per això és convenient també parlar de sostenibilitat de la vida, de totes aquelles necessitats bàsiques, recursos econòmics i emocionals, individuals i col·lectius que els éssers humans necessitem des que naixem fins que morim. Posar al centre les cures, parlar de "treballs", tant els remunerats com els no remunerats, que representen un percentatge del PIB important. Treballs que en una cultura patriarcal-capitalista són invisibilitzats i ignorats, que sense ells la "força de treball" no es reproduiria, majoritàriament assumits per dones, que resten estigmatitzades i precaritzades, mostrant la pobresa en femení.

Però en l'objectiu de combatre les desigualtats socials hi han de confluïr la garantia de rendes per a totes les persones, el treball digne i una fiscalitat justa que compensi la riquesa social generada per la força del treball. Ha d'incloure el repartiment del treball, reduint les jornades laborals i l'augment de temps lliure que permeti el desenvolupament personal. Han de ser mesures que podrien evitar la fractura social i democràtica que suposa la desigualtat, com ara l'exploració d'opcions socials diversificades que afavoreixin l'emancipació i la socialització, no sempre vinculades al treball, alhora que es mantenen ingressos, fet compatible amb les rendes del treball i amb la resta de drets, per accedir-hi en igualtat de condicions, reduint les causes de l'exclusió. Un exemple són les propostes de l'Herència universal, de Yolanda Díaz, que volen eliminar les desigualtats per motius d'origen entre joves i la reducció de la jornada laboral a 35 hores.

Comentar també que el repte actual a Catalunya de la RGC, a la qual cal integrar de manera coherent l'IMV a través d'una finestra única, reduint la burocràcia en els tràmits i amb coordinació directa entre administracions. La convivència de totes dues prestacions a Catalunya situen un estalvi al

voltant de 250 milions d'euros, amb un desplegament total de l'IMV, que permetrien incorporar les reformes amb què s'està treballant al Parlament de Catalunya i que són urgents, augmentant alhora les partides del pressupost. Propostes per assolir una major cobertura econòmica de la RGC, que arribi a un univers més ampli de persones, que sigui compatible amb les rendes del treball i resolgui la pobresa i l'accés a l'habitatge, centrada en les persones per no fer-les dependents de l'entorn familiar. Uns altres elements per considerar són l'accés universal al lleure, la cultura i la participació social, convivint amb sistemes de tarifació social generalitzats.

En aquesta línia, el Projecte pilot B-MINCOME de l'Ajuntament de Barcelona, adreçat a llars vulnerables i que combina renda mínima i polítiques socials actives, valora que la concessió de rendes redueix de manera significativa el risc de pobresa i millora la satisfacció vital. Els ajuntaments s'han anat consolidant com un instrument d'interlocució caracteritzat per un gran dinamisme i capacitat d'innovació.

Sempre hem de recordar la justícia

La vulnerabilitat i les desigualtats socials afecten greument barris, pobles i ciutats, especialment col·lectius com la gent gran que viu sola, dones soles amb infants a càrrec, dones víctimes de violències masclistes, persones amb diversitat funcional o persones migrades amb feines precàries; en definitiva, persones travessades pels diferents eixos de desigualtat (classe social, edat, gènere, ètnia, lloc de residència, origen...). S'estableixen entre territoris segons el nivell de renda diferències de més de 10 anys en l'esperança de vida. És evident, doncs, que la pobresa escurça la vida i condiciona la salut de les persones, també la mental.

En aquest sentit, fem un incís per subratllar que l'experiència en la gestió dels serveis socials municipals reclama un nou model d'atenció que substitueixi definitivament l'assistencial, que superi la inèrcia de tràmits i burocràcia i que posi la persona al centre, tot fent possible que l'acompanyament d'aquests projectes de vida per a tothom es realitzi amb un treball interdisciplinari en col·laboració amb els agents socials d'institucions, del tercer sector i del teixit social de cada territori.

El risc d'exclusió social en pobles, barris i ciutats està fortament condicionat per factors estructurals i per les diferents crisis que es donen al llarg del temps. Per això cal seguir la senda traçada d'una lluita aferrissada contra discriminacions, desigualtats i bretxes, i guanyar en cohesió, incloent la riquesa de la diversitat, perquè tothom realitzi els seus projectes de vida des de l'equitat.

Les societats del segle XXI continuen marcades per múltiples eixos de pobresa, desigualtat i exclusió social, agreujats pels efectes derivats de l'envelliment de la població, els fluxos migratoris i el canvi climàtic. Condicions estructurals que hem de revertir, cercant altres formes de repartir el treball i de garantir drets i rendes i defensant sistemes de protecció sòlids. Necessitem polítiques públiques amb inversió suficient que provoquin canvis des de l'arrel, que redistribueixin la riquesa amb una mirada global al món i que amb corresponsabilitat social trenquin la cronificació de la pobresa, apostin pel treball decent i afavoreixin el desenvolupament de projectes de vida.

Per a Joan N. García-Nieto, era vital la construcció d'un món més igualitari i, per fer-ho possible, la justícia social era el camí indestruïble i l'única possibilitat per tenir societats cohesionades, democràtiques i en pau. La utopia necessària.

“Debemos pues sabemos, gritar al poderoso...”